COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

COM(92) 188 final - SYN 415

Bruselas, 4 de junio de 1992

Propuesta de

DIRECTIVA DEL CONSEJO

relativa a los sistemas de garantía de depósitos

(presentado por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A. Consideraciones generales

1) Principales objetivos de la propuesta

La presente propuesta de Directiva tiene dos objetivos: proteger a los depositantes de toda entidad de crédito y garantizar la estabilidad del sistema bancario en su conjunto.

En efecto, los sistemas de garantía de depósitos, que se basan en un mecanismo de solidaridad entre las entidades de crédito, protegen a los depositantes en caso de crisis financiera de una entidad y, de forma especial, a aquellos que carecen de los conocimientos necesarios en materia de finanzas para distinguir entre las entidades de crédito sólidas y las menos sólidas.

Ahora bien, al mismo tiempo, los sistemas de garantía protegen al sistema bancario frente al riesgo de que los depositantes retiren sus fondos, no ya únicamente de una entidad en dificultades, sino también de entidades relativamente sanas sobre las que corran rumores sin fundamento.

Por tanto, uno de los motivos para la creación de tales sistemas de garantía es que los costes o las posibles distorsiones a que puede dar lugar su existencia no son en nada comparables al coste que supondría para el conjunto de la sociedad una retirada masiva de los depósitos bancarios.

2) Necesidad de los sistemas de garantía de depósitos

Ya a finales de 1986, la Comisión estaba convencida de la conveniencia de que las entidades de crédito de todos los Estados miembros se adhiriesen a un sistema de garantía de depósitos, por lo que publicó la Recomendación 87/63/CEE⁽¹⁾, al estimar que dicho instrumento, si bien carecía de carácter obligatorio, era suficiente para inducir a los Estados miembros en los que entonces no existía sistema de garantía alguno a que creasen uno.

Pese a dicha Recomendación, algunos Estados miembros no están aún convencidos de la necesidad de que todas sus entidades de crédito estén obligatoriamente afiliadas a un sistema de garantía de depósitos, y dos Estados miembros siguen sin haber establecido sistema alguno.

Ciertamente, el endurecimiento de las medidas cautelares aplicadas a nivel nacional e internacional está destinado a evitar crisis financieras en las entidades de crédito.

Sin embargo, al igual que las normas cautelares, los sistemas de garantía de depósitos constituyen una nueva red de seguridad con la que la Comisión y las autoridades supervisoras se esfuerzan por rodear a las entidades de crédito en previsión de una ampliación de sus actividades a partir de 1993.

Esta garantía obedece a la necesidad de prever la posibilidad de que, aun estando sujeta a una normativa muy estricta y a un serio control cautelar, una entidad de crédito atravesase dificultades financieras.

En tal caso, deberá compararse el coste de indemnización de los depositantes con el de las medidas de saneamiento imprescindibles para la supervivencia de la entidad.

(1) DO nº L 33 de 4.2.1987

Las disposiciones de la presente propuesta de Directiva responden, por tanto, a una necesidad y reflejan la experiencia adquirida con la aplicación de la Recomendación 87/63/CEE antes mencionada y las recientes crisis de entidades con sucursales en varios Estados miembros. La propuesta trata de satisfacer los deseos formulados al respecto por el Parlamento Europeo, en su dictamen⁽²⁾ sobre la propuesta de Directiva relativa al saneamiento y la liquidación de las entidades de crédito y a la garantía de depósitos (COM(88)4⁽³⁾), y por el Comité Consultivo Bancario, en su dictamen de 4 de julio de 1991⁽⁴⁾.

3) Principio de garantía por el sistema del Estado miembro de origen de la entidad de crédito

La protección se basa en el principio de garantía de los depósitos de las sucursales por el sistema existente, para la categoría de entidad considerada, en el Estado miembro en que radique su domicilio social (Estado miembro de origen).

Una vez haya concluido la creación del mercado interior, todas las actividades que una entidad de crédito ejerza en la Comunidad por mediación de sus sucursales quedarán sujetas a un único sistema de contabilidad, de balance y cuenta de pérdidas y ganancias y de supervisión de solvencia.

En opinión del Comité Consultivo Bancario, la inobservancia del principio del país de origen, en un ámbito tan estrechamente relacionado con la supervisión bancaria como es el de la garantía de depósitos, habría sentado un precedente peligroso para la realización del mercado interior de los servicios bancarios.

Esta solución supondrá la coexistencia de varios sistemas de garantía de depósitos en un mismo territorio. Sin embargo, la experiencia de los

(2) Dictamen del P.E. en primera lectura de 13.3.1987; DO nº C 99 de 13.4.1987, p. 211.

(3) DO nº C 36 de 8.2.1988, p. 3.

(4) Informe del Presidente 1988-1991, anexo C.

Estados miembros en los que, durante muchos años, distintas categorías de entidades de crédito han venido ejerciendo sus actividades y disfrutando de la cobertura de sistemas de garantía diferentes, demuestra que ello es perfectamente viable, sobre todo si el nivel mínimo de cobertura fijado por la propuesta permite asegurarse de que los depositantes con escasos ingresos serán indemnizados en todos los Estados miembros.

4) Elección del nivel mínimo de cobertura

La Recomendación 87/63/CEE no proponía un nivel de cobertura armonizado. Sin embargo, con vistas a la plena realización del mercado único, parece fundamental que los depositantes disfruten de una protección de base, tanto si han efectuado sus depósitos en una entidad con domicilio social en el Estado miembro en que residen como en la sucursal de una entidad establecida en otro Estado miembro.

El nivel mínimo de cobertura fijado para la Comunidad no debe ser demasiado elevado para evitar que se produzcan situaciones como la que se dio en los Estados Unidos, donde los riesgos a que estaban expuestos los depositantes en sí eran tan reducidos que se despreocupaban por completo de la solidez de sus entidades de crédito.

Además, los gestores de dichas entidades se vieron incitados a constituir carteras de elevado riesgo, sin que la disciplina del mercado les obligase a pagar fuertes primas a su sistema de garantía por el aumento del riesgo de quiebra que dichas inversiones suponían para la entidad. Así, los riesgos beneficiaban a las entidades, mientras que las pérdidas corrían a cargo del sistema de garantía.

A la inversa, el importe no debe ser demasiado reducido y dejar un número excesivo de depósitos fuera del alcance del umbral de cobertura.

Los únicos datos no agregados que ha podido obtener la Comisión se refieren al importe medio de los depósitos en cajas de ahorro en la Comunidad.

La cuantía media de dichos depósitos es de 2.500 ecus, aproximadamente, y se estima que, para las imposiciones a plazo, el promedio es de 30.000 ecus, para las cuentas corrientes de 2.600 ecus y para las libretas de ahorro de 2.150 ecus.

Por desgracia, estos promedios no bastan para determinar cuántos depósitos o depositantes están situados por encima o por debajo de un umbral mínimo de protección dado.

Dado que no se dispone de estadísticas directas sobre la magnitud y distribución de las cuentas, se ha considerado oportuno intentar fijar un nivel mínimo de cobertura basándose en los niveles que rigen actualmente en los sistemas de garantía de los Estados miembros. Si se excluyen los dos Estados miembros (Alemania e Italia) en los que el nivel de protección es sumamente elevado, y aquellos en los que no existe protección alguna (Grecia y Portugal), el nivel medio es de unos 15.000 ecus, razón por la cual se ha optado por esta cifra.

Al elaborar la propuesta, se consideró si no sería preferible fijar un límite de reembolso en porcentaje, que sería más equitativo pero ofrecería una protección menor a los depositantes. Esta solución fue descartada, ya que hubiese implicado modificaciones muy importantes para algunos sistemas de solidaridad, en los que se asume la responsabilidad de poner a flote a la entidad en dificultades y, por tanto, de indemnizar íntegramente a sus depositantes.

La solución de compromiso finalmente adoptada permite limitar la garantía a un porcentaje del depósito, pero exige que quede cubierto al menos el 80% de los depósitos en tanto la indemnización no alcance los 15.000 ecus. Por encima de este límite, los Estados o los sistemas pueden libremente fijar porcentajes de reembolso más bajos o, incluso, denegar toda garantía.

5) Fijación de plazos de reembolso muy breves

La mayoría de los sistemas de garantía existentes prevén un rápido reembolso a los depositantes, pero, hasta el momento, éste solía depender del desarrollo de los procedimientos de liquidación y de la diligencia de los liquidadores nombrados por los tribunales.

Ello daba muchas veces lugar a demoras que, comprensiblemente, provocaban la desesperación entre los depositantes. Es también una fuente de litigios que, a su vez, pueden frenar las operaciones de reembolso.

La propuesta permite desvincular el punto de partida del plazo de los procedimientos de insolvencia; se ha tomado en consideración el tiempo de indisponibilidad del depósito, el cual, si excede de 10 días consecutivos, permite iniciar las operaciones de entrega de la garantía, que, salvo en circunstancias excepcionales, deberán concluir en un plazo de tres meses.

El plazo de 3 meses se deriva de la experiencia práctica de los gestores de sistemas de garantía. En la mayor parte de los casos en que no pudo respetarse tal plazo, era porque estaba en curso un procedimiento judicial y no se distinguió entre la evaluación de los depósitos a efectos de la garantía y las evaluaciones necesarias para la liquidación, que requieren inevitablemente más tiempo.

6) Información a los depositantes

La protección de los depositantes, objetivo prioritario, implica que se les informe perfectamente del alcance de la protección de sus depósitos.

Asimismo, es importante una información completa para reducir el riesgo sistémico: si el depositante es más consciente del riesgo se interesará

más por la buena gestión de la entidad a la que confíe sus depósitos y prestará menos atención a los rumores injustificados.

7) Temas no previstos en la propuesta

Varios extremos no han dado lugar a disposiciones armonizadas. Entre ellos se cuentan principalmente:

a) El régimen jurídico de los sistemas de garantía

Tal como figuraba ya en la Recomendación⁽⁵⁾, ha sido necesario admitir la coexistencia en la Comunidad y, en ocasiones, dentro de un mismo Estado, de sistemas de protección de depósitos creados por instituciones privadas y otros regulados por disposiciones legales; la mayor parte de los sistemas privados están bajo la responsabilidad de organizaciones profesionales, pero son tan eficaces como los sistemas gestionados por los poderes públicos o con la ayuda de los mismos.

Por consiguiente, se ha considerado oportuno no alterar esta situación y no obligar a los Estados miembros y las entidades de crédito a plegarse a un sistema de garantía sujeto a un determinado régimen.

b) Método de financiación

Hay también grandes diferencias en la financiación de los sistemas; la principal de ellas es la existencia o inexistencia de un fondo de garantía. Si existe tal fondo, las entidades de crédito ingresan periódicamente en él su contribución, calculada en función del valor

(5) Cuarto considerando de la Recomendación 87/63/CEE antes mencionada.

de los depósitos asegurados o de cualquier otro parámetro; la gestión de dichos fondos corresponde al propio sistema de garantía.

En otros casos, la financiación del sistema de garantía se realiza mediante compromisos de pago suscritos por las entidades de crédito afiliadas que únicamente se materializan en caso de siniestro. Por último, algunos sistemas son mixtos (constitución de un fondo al que se añaden compromisos o posibles contribuciones excepcionales en caso de siniestro).

Tras haber comprobado que los mecanismos de financiación permiten indemnizar a todos los depositantes que disfruten de cobertura, incluidos los de las sucursales situadas en otro Estado miembro, no se ha considerado oportuno armonizar normas que están estrechamente relacionadas con la gestión de los sistemas.

Se ha estudiado la conveniencia de que el sector público tenga la posibilidad de prestar ayuda a los sistemas de garantía en situaciones urgentes de excepcional gravedad o cuando los recursos de estos se hayan agotado, para permitirles hacer frente a sus compromisos con los depositantes.

No se ha estimado oportuno, en la propuesta de Directiva, prohibir tal intervención, que, en la práctica, puede resultar necesaria, si bien no es deseable que se convierta en norma general y no puede quebrantar las disposiciones del Tratado relativas a las ayudas estatales.

B. Comentarios a los artículos

Artículo 1

El artículo 1 contiene algunas definiciones, necesarias para la correcta comprensión de la Directiva. Para evitar alargar la lista de definiciones, no se han incluido las que figuran en otras Directivas, por ejemplo, las de "entidad de crédito" y "sucursal", que aparecen en la Directiva 77/780/CEE⁽⁶⁾, o las de "Estado miembro de origen" y "Estado miembro de acogida", que se hallan en la Directiva 89/646/CEE⁽⁷⁾.

Apartado 1

El concepto de "depósito", tal como figura en el apartado 1, está visto desde la perspectiva del depositante. Éste dispone de un "saldo acreedor" o un "derecho", mientras que, a efectos de las Directivas sobre cuentas anuales, estos conceptos figuran, como es lógico, en la contabilidad de la entidad de crédito como "deudas" u "obligaciones". Por el contrario, en el apartado 2, se ha seguido esta última terminología, al tratarse de fondos no reembolsables.

Los depósitos garantizados son los que se derivan bien de fondos que se hayan mantenido en cuenta, de forma permanente o temporal, bien de derechos representados por títulos transmisibles.

El concepto de "saldo acreedor" es relativamente claro y se utiliza concretamente para las cuentas corrientes, pero se ha completado con el de "fondos que se hayan mantenido en cuenta", que debe llevar a pensar en libretas o cuentas de ahorro o cualquier otro instrumento en el que los fondos permanezcan en general más tiempo que en las cuentas corrientes.

(6) DO n^o L 322 de 17.12.1977.

(7) DO n^o L 386 de 30.12.1989.

En cambio, para entender el concepto de "derechos representados por títulos transmisibles", conviene remitirse a los artículos 19 y 20 de la Directiva 86/635/CEE⁽⁸⁾, relativa a las cuentas anuales, que tratan de los "débitos a clientes" y emplean dicha fórmula con mayores precisiones: "deudas representadas por títulos transmisibles, en particular los certificados de depósito y los bonos de caja, así como las aceptaciones propias y los pagarés en circulación".

La referida Directiva establece una distinción entre dichas deudas y las obligaciones, que figuran en una rúbrica independiente. Esta distinción no figura en la definición, pero las obligaciones pueden quedar excluidas de la garantía si los Estados miembros así lo desean (opción 11 del anexo).

La definición no especifica que los depósitos hayan de ser nominativos: también en este caso existe una posibilidad de opción y los Estados pueden excluir de la garantía los depósitos al portador (punto 9 del anexo).

Ha sido preciso aclarar el concepto de "cuenta conjunta", al haberse optado por fijar un límite por depositante, para no perjudicar a los titulares de tales cuentas (artículo 5.2).

Por último, se ha definido el concepto de "depósito indisponible"; para acelerar el pago del importe garantizado, se ha decidido desvincularlo de los procedimientos de saneamiento y liquidación de la entidad de crédito, y atenerse a una constatación objetiva, esto es, que durante 10 días consecutivos se ha privado a un depositante de unos fondos que la entidad de crédito hubiese tenido que restituirle.

En la mayoría de los Estados miembros, el plazo de 10 días debería, en principio, permitir obtener una decisión administrativa o judicial por la que se declare la suspensión de pagos. El plazo será más corto si esta decisión provoca el cierre de las ventanillas, ya que, en este caso, el plazo de pago (de 3 meses) empezará a contar desde la fecha de aquélla.

(8) DO nº L 372 de 31.12.1986, p. 8.

Apartado 2

Algunos depósitos quedan excluidos de la garantía; en primer lugar, los interbancarios, lo cual se justifica ante todo porque, según cabe suponer, los bancos conocen mejor la situación de la entidad en crisis que las demás personas que mantienen relaciones comerciales con ella.

En lo que respecta a los préstamos subordinados, la cláusula que se recoge en la definición los excluye contractualmente de la garantía, dado que, por su naturaleza, sólo se reembolsan al término de la liquidación y en función de los resultados de la misma.

Artículo 2

Apartado 1

Este apartado contiene dos principios fundamentales:

- a) El principio de adhesión obligatoria de todas las entidades de crédito autorizadas a un sistema de garantía de depósitos. La Recomendación 87/63/CEE antes señalada contemplaba ya la creación de un sistema de garantía de depósitos, como mínimo, en cada uno de los Estados miembros de la Comunidad; la propuesta de Directiva no sólo mantiene esta exigencia (que dos Estados aún no ha satisfecho), sino que hace obligatoria la adhesión de todas las entidades autorizadas a los sistemas creados.

Dicha exigencia es la contrapartida de la libertad de establecimiento de sucursales y de la libre prestación de servicios.

Dado que las entidades de crédito disfrutaban de estas libertades, es absolutamente necesario que los depositantes de las sucursales implantadas en otros Estados y que no están bajo la supervisión de

las autoridades locales, así como los que confían depósitos a bancos no establecidos en el país donde residen, estén protegidos frente a cualquier riesgo de crisis financiera de la entidad considerada.

Ello constituirá una novedad en varios Estados en los que la adhesión es facultativa, si bien, en la práctica, la mayoría de las entidades de crédito está afiliada a un sistema de garantía de depósitos.

- b) El principio de cobertura de los depósitos de las sucursales por el sistema de garantía del Estado miembro de origen.

Este principio es consecuencia lógica del de control por el Estado miembro del domicilio social. Dado que la concesión de autorización, que permite abrir sucursales y operar en régimen de libre prestación de servicios en toda la Comunidad, corresponde a la autoridad competente del país de origen, y que la supervisión de la actividad, y en especial el control de la solvencia, se efectúa en el país del domicilio social, conviene obrar de forma consecuente en relación con los sistemas de garantía.

Habida cuenta de que la entidad de crédito y sus sucursales forman un todo, tanto desde el punto de vista jurídico como bancario, parece lógico que dicha entidad participe en el sistema de solidaridad entre entidades de crédito del país en que tenga su domicilio social. Los vínculos entre dicha entidad y los países de acogida de las sucursales serán mucho menos importantes que en la actualidad, puesto que, hoy por hoy, las sucursales reciben autorización como las entidades locales y deben atenerse a las normas del Estado en que se implanten.

Apartado 2

El principio de adhesión al sistema del país de origen, que ha quedado firmemente establecido en el apartado 1, debe matizarse con la

disposición que figura en el apartado 2, cuyo objeto es permitir que los depositantes de las sucursales disfruten de las ventajas del sistema de garantía del país de acogida.

Ello no constituye una excepción propiamente dicha al principio de adhesión al sistema del país de origen, puesto que éste sigue estando obligado a garantizar a los depositantes de las sucursales el importe ofrecido a los del domicilio social de la entidad, sino que supone, de algún modo, una garantía complementaria que debe concederse siempre que los directivos de las sucursales juzguen oportuno ofrecerla a sus clientes, con objeto de no verse penalizados desde el punto de vista de la competencia.

Los sistemas de garantía que ofrezcan un nivel elevado de protección deberán, para hacer posible la adhesión de las sucursales, buscar soluciones a problemas distintos de los que hayan tenido que resolver para otorgar su cobertura a las entidades con domicilio social en su territorio.

Es probable que dichos sistemas hayan de recurrir al envío de información, tal como se contempla en el apartado 5 del artículo 12 de la Directiva 77/780/CEE, modificado por el artículo 16 de la Directiva 89/646/CEE⁽⁹⁾, para obtener los datos pertinentes sobre la actividad y la solvencia de la entidad cuya sucursal solicita la adhesión.

Asimismo, deberán sin duda establecer condiciones especiales de contribución en función de los riesgos asumidos, puesto que una parte del riesgo estará ya cubierta por la garantía del domicilio social.

Estas dificultades de orden técnico no deben desviar la atención del interés esencial de esta disposición, esto es, evitar distorsiones de competencia entre entidades y diferencias en los niveles de protección difícilmente aceptables entre los depositantes de un mismo país.

(9) DO nº L 386 de 30.12.1989, p. 8.

Apartado 3

Dado que una parte de los sistemas de garantía de depósitos existentes en la Comunidad han sido creados por contratos privados, el carácter obligatorio de la adhesión de todas las entidades a dichos sistemas supondrá una presión imprevista hasta la fecha, pero que, en principio, no planteará excesivos problemas. En cambio, su permanencia en el sistema en el supuesto de que no cumplan las exigencias contractuales, por ejemplo, en materia de contribución financiera o información, podría resultar muy difícil.

Admitir que un sistema de garantía excluya a una entidad significa privar a los depositantes de la protección a la que, en virtud de la Directiva, tienen derecho u obligar a los poderes públicos a revocar la autorización, revocación que dependería entonces de la decisión de un organismo privado, lo cual es, en principio, inaceptable y, en determinados casos, excesivo si el incumplimiento es de escasa gravedad.

Para resolver este dilema, la propuesta de Directiva admite la posibilidad de exclusión si todas las medidas tomadas para llevar a la entidad a cumplir con sus obligaciones han resultado infructuosas, pero exige que se mantenga la garantía durante un año después de la exclusión, con independencia de la decisión que haya adoptado la autoridad de control.

Esta disposición permitirá a las autoridades de control de la entidad de crédito no recurrir de forma excesivamente automática a la sanción última que constituye revocar la autorización, y hallar, en su caso, otra solución para salvaguardar los derechos de los depositantes de la entidad excluida.

Artículo 3

En este artículo se reconoce que las sucursales de entidades con domicilio social fuera de la Comunidad no pueden quedar obligatoriamente sujetas al régimen de adhesión al sistema del país de origen previsto para las entidades comunitarias.

Como consecuencia de ello, los depositantes de dichas sucursales podrían verse privados de toda protección si los Estados miembros no toman las disposiciones necesarias para que se adhieran al sistema local, cuando no estén cubiertas por otro sistema de garantía, por ejemplo en su país de origen.

Por este motivo, los apartados 2 y 3 de este artículo disponen que se facilite la oportuna información a los depositantes de dichas sucursales, es decir que establecen de hecho una aplicación, adaptada a estas circunstancias concretas, de las normas relativas a la información de los depositantes que figuran en el artículo 6 de la propuesta de Directiva, en relación con las entidades cuyo domicilio social está situado en la Comunidad.

Artículo 4

Esta disposición de la Directiva, de carácter esencial, especifica el nivel mínimo de protección que debe garantizarse a los depositantes a escala europea.

Apartados 1 y 4

En el apartado 1 se precisa que el límite mínimo de cobertura por depositante es de 15.000 ecus para el conjunto de sus depósitos, cifra ligeramente más elevada que la cobertura máxima ofrecida en España (11.700 ecus), Bélgica y Luxemburgo (11.900 ecus) e Irlanda (13.200 ecus) y algo más baja que la ofrecida en los Países Bajos (17.400 ecus) y el Reino Unido (21.400 ecus).

Esta garantía mínima cubrirá íntegramente los depósitos inferiores a 15.000 ecus y el importe abonado a un depositante será pues de 15.000 ecus si el total de sus depósitos asciende a 15.000 ecus, de 12.000 ecus si el total de depósitos es de 12.000, de 10.000 ecus si el total de depósitos es de 10.000, etc.

No obstante, en respuesta a la inquietud manifestada, concretamente, por economistas y financieros, que desean que una parte de los riesgos sea asumida por los depositantes para incitarlos a interesarse por la solidez de la entidad a la que confían sus depósitos (aun cuando estos no sean cuantiosos), el apartado 4 permite fijar la cobertura mínima en forma de porcentaje en lugar de concretarla en un importe a tanto alzado.

En consecuencia, si el porcentaje garantizado equivale al 90% del total de depósitos, el mínimo de 15.000 ecus no se abonará en concepto de reembolso de un depósito de 15.000 ecus sino de un depósito de mayor cuantía, esto es, 16.650 ecus. Si el total de depósitos asciende a 15.000 ecus, y partiendo una vez más de la hipótesis de que el importe garantizado equivale al 90% del total de depósitos, porcentaje que no puede ser inferior mientras no se haya superado el límite de cobertura mínima, el depositante sólo recibirá 13.500 ecus.

Es importante señalar que la fijación de un porcentaje, dentro de los límites señalados en el apartado 4, no supondrá una reducción del reembolso mínimo a cargo del sistema, que sigue siendo de 15.000 ecus, pero, para llegar a este importe, es evidente que, en un sistema en el que cada depositante reciba sólo un porcentaje de sus depósitos, habrá que considerar un importe superior a 15.000 ecus al determinar el límite mínimo de los depósitos cubiertos para cada depositante (el importe oscilará necesariamente entre 15.000 y 16.650 ecus, en función del porcentaje de reembolso adoptado).

Apartado 2 y anexo

El apartado 2 faculta a los Estados miembros para autorizar que queden excluidos de la garantía determinados depositantes o depósitos, mencionados en el anexo.

La exclusión se refiere principalmente a los depósitos de las entidades financieras, las empresas de seguros, el Estado y la Administración local, así como de otros depositantes que difícilmente pueden considerarse dignos de protección por su incompetencia o ineficacia a nivel económico. Sin embargo, la lista de estas personas y entidades es bastante larga y la evaluación de la conveniencia de excluirlas varía entre un Estado miembro y otro.

Por esta razón, no ha sido posible proceder a una armonización más completa en este ámbito, ya que el régimen de estas diversas entidades y depositantes depende en gran medida del importe de la garantía concedida por el sistema y de la tradición nacional. Así, varios sistemas abarcan, con ciertas condiciones, los depósitos al portador, porque recurren a ellos los ahorradores más modestos (libretas de ahorro no nominativas), mientras que la mayoría de los demás países desean excluirlas.

La lista del anexo 1 es limitativa y los Estados miembros sólo podrán excluir de la garantía a las entidades y personas que figuren en ella; cualquier otra exclusión sería contraria a la Directiva.

Apartado 3

El apartado 3 permite, por el contrario, mantener o adoptar disposiciones que eleven el máximo garantizado, y ello sin restricción alguna.

Esta disposición permitirá mantener los sistemas que ofrezcan una indemnización completa a los depositantes, lo cual es consecuencia de un método de solidaridad destinado a evitar la liquidación de las entidades pertenecientes al sistema, que prevé, por consiguiente, el reembolso íntegro de todos los depósitos en caso de cierre.

Al margen de este caso extremo de reembolso de los depósitos al 100%, los sistemas que abonan en concepto de garantía importes superiores al mínimo que figura en la propuesta de Directiva, como el danés, el francés o el italiano, podrán mantener su importe actual de reembolso⁽¹⁰⁾.

Artículo 5

Este artículo precisa la norma con arreglo a la cual la garantía se aplica por depositante y no por depósito, al objeto de evitar abusos, como ocurre en los Estados Unidos, y establece algunas disposiciones para casos especiales que han dado lugar a dificultades con soluciones divergentes a nivel nacional.

El apartado 2 establece una norma complementaria para las cuentas conjuntas y, por último, el apartado 3 precisa la situación de un tipo particular de cuentas, en las que el titular actúa por cuenta de terceros que son los verdaderos propietarios de los fondos en ellas depositados.

Ejemplos típicos son el de un administrador de fincas que recibe la renta de los inquilinos antes de entregarla a los propietarios, el de los notarios, por cuyas cuentas pasan cantidades destinadas a sus clientes, o el de los representantes que actúan por cuenta de sus representados.

Los sistemas de garantía podrán imponer determinadas formalidades para asegurarse de la identidad y los derechos de los depositantes.

(10) Dinamarca : 31.500 ecus
Francia : 57.500 ecus
Italia : 511.000 ecus por depósito

En algunos países, dichas formalidades preceden a la concesión de la garantía. La propuesta de Directiva no se pronuncia sobre esta cuestión, que depende de los usos nacionales en relación con estas cuentas, usos que distan mucho de estar normalizados.

Artículo 6

Este artículo establece una serie de normas relativas a la información que deben recibir los clientes de las entidades de crédito.

Dicha información debe ser precisa y completa, ya que los sistemas a los que se adherirán las sucursales de un mismo Estado miembro podrán ser mucho más numerosos de lo que lo son hoy en día. Por tanto, es fundamental, en especial si los depositantes de la sucursal no disfrutan de la cobertura complementaria del sistema local, tal como está previsto en el artículo 2.2, que dichos depositantes estén bien informados de las ventajas e inconvenientes del sistema de garantía al que está afiliada su entidad.

Artículo 7

Este artículo enuncia uno de los principales objetivos de la propuesta, a saber, lograr que el pago de la garantía prevista por el sistema se efectúe con la mayor rapidez posible.

A tal fin se fija un plazo de 3 meses (renovable una sola vez) para efectuar los pagos.

Normalmente, este plazo empezará a contar desde la decisión de las autoridades de supervisión o de un tribunal, que suelen intervenir con rapidez cuando la solvencia de una entidad de crédito está en entredicho.

Sin embargo, para evitar que los depositantes, y sobre todo los pequeños depositantes, tengan que soportar, como ocurre en ocasiones, el tiempo de espera durante el cual se determina y se pone en marcha un plan de saneamiento -sin que se normalice la actividad de la entidad- o la dilación de un procedimiento de liquidación judicial, se ha previsto un período de indisponibilidad de 10 días, transcurrido el cual, si no se ha adoptado decisión alguna con respecto a la actividad de la entidad, nace el derecho a cobrar el importe garantizado y la obligación de respetar el plazo de 3 meses.

Apartados 2 y 3

No obstante, es posible prorrogar el plazo, si bien únicamente cuando la solución de casos concretos plantee dificultades, por ejemplo, problemas para probar el importe del depósito (en caso de cuentas conjuntas o de cuentas en las que el titular no sea el beneficiario), para identificar al depositante o, incluso, para determinar su paradero (si ha cambiado de dirección o reside en otro país).

La brevedad de los plazos obedece a la voluntad de favorecer a los depositantes y no debería obrar en contra de sus intereses; de ahí que no se fije ningún límite de tiempo en la propuesta para que puedan hacer valer sus derechos.

El apartado 4 completa las disposiciones relativas a la información de los depositantes que figuran en el artículo 6 con la información que debe facilitarse cuando se produce el siniestro.

Por último, el apartado 5 precisa que el pago se efectuará en moneda nacional o en ecus, aclaración que resulta necesaria dado que la garantía no se limita a los depósitos en divisas comunitarias o en ecus, sino que cubre también los depósitos en monedas de terceros países, según se deriva de lo previsto en el apartado 1 del artículo 5.

Artículo 8

En el párrafo primero del apartado 1 se insta a los Estados miembros a dar cumplimiento a la Directiva para el 1 de enero de 1994.

El párrafo segundo dispone que, cuando los Estados miembros adopten las disposiciones de Derecho interno necesarias, éstas hagan referencia a la presente Directiva o vayan acompañadas de tal referencia en su publicación oficial.

El apartado 2 se refiere a la comunicación a la Comisión de las disposiciones fundamentales de Derecho interno adoptadas por los Estados miembros.

Artículo 9

Este artículo contiene la fórmula usual con arreglo a la cual la presente Directiva va dirigida a todos los Estados miembros.

Propuesta de

DIRECTIVA DEL CONSEJO

relativa a los sistemas de garantía de depósitos

El Consejo de las Comunidades Europeas,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, las frases primera y tercera del apartado 2 de su artículo 57,

Vista la propuesta de la Comisión,

En cooperación con el Parlamento Europeo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

Considerando que, de conformidad con los objetivos del Tratado, resulta conveniente promover un desarrollo armónico de las actividades de las entidades de crédito en el conjunto de la Comunidad, suprimiendo toda restricción de las libertades de establecimiento y de prestación de servicios y reforzando al mismo tiempo la estabilidad del sistema bancario y la protección de los ahorradores;

Considerando que, paralelamente a la supresión de las restricciones que afectan a las actividades de las entidades de crédito, conviene considerar la situación a que podría dar lugar la crisis financiera de una entidad de crédito con sucursales en otros Estados miembros; que es imprescindible que exista un nivel mínimo armonizado de garantía de depósitos, independientemente del lugar de la Comunidad en que estén éstos ubicados; que la protección de los depósitos es tan esencial como las normas cautelares para la plena realización del mercado único bancario;

Considerando que, cuando se produzca el cierre de una entidad de crédito insolvente, los depositantes de las sucursales situadas en un Estado miembro que no sea el de la sede social de la entidad de crédito deben estar protegidos por un sistema de garantía, al igual que todos los demás depositantes de la entidad;

Considerando que, para las entidades de crédito, el coste de participación en un sistema de garantía no es en absoluto comparable al que ocasionaría una retirada masiva de los depósitos bancarios, no sólo de una entidad en dificultades sino también de entidades saneadas, a raíz de una pérdida de confianza de los depositantes en la solidez del sistema bancario;

Considerando que únicamente diez Estados miembros disponen de un sistema de garantía, de conformidad con la Recomendación 87/63/CEE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1986, relativa al establecimiento de sistemas de garantía de depósitos en la Comunidad⁽¹⁾; que esta situación puede resultar perjudicial para el buen funcionamiento del mercado único;

Considerando que la Segunda Directiva 89/646/CEE del Consejo⁽²⁾, modificada por la Directiva 92/30/CEE⁽³⁾ prevé un sistema de autorización y supervisión de las entidades de crédito, que entrará en vigor el 1 de enero de 1993;

Considerando, en efecto, que la supresión de la autorización de las sucursales en los Estados miembros de acogida, como consecuencia de la concesión de una única autorización válida en toda la Comunidad, así como el control de su solvencia por las autoridades competentes del Estado miembro de origen, justifican que todas las sucursales creadas por una misma entidad de crédito en la Comunidad se adhieran a un único sistema de garantía; que dicho sistema no puede ser sino el que exista, para la categoría de entidades considerada, en el Estado de la sede social, debido, en particular, a la relación existente entre la supervisión de la solvencia de una sucursal y su pertenencia a un sistema de garantía de depósitos;

(1) DO nº L 33 de 4.2.1987, p. 16

(2) DO nº L 386 de 30.12.1989, p. 1

(3) DO nº L 110 de 28.4.1992, p. 52

Considerando que la armonización debe limitarse a los elementos mínimos necesarios para garantizar, en un plazo muy breve, un pago en concepto de garantía calculado en función del nivel mínimo armonizado;

Considerando que, por motivos económicos, no resulta oportuno generalizar a escala comunitaria un nivel de protección muy elevado que pueda incitar a una gestión arriesgada de las entidades; que, además, si se produjera un siniestro grave, las contribuciones a la financiación del sistema podrían ser demasiado gravosas para las entidades afiliadas;

Considerando, no obstante, que el nivel armonizado de garantía no debe ser demasiado bajo, a fin de no dejar un número excesivo de depósitos fuera del umbral mínimo de protección; que, al no disponerse de estadísticas sobre el importe y la distribución de los depósitos en las entidades de crédito de la Comunidad, parece razonable basarse en la mediana de garantía que ofrecen los sistemas nacionales; que dicha mediana es de 15.000 ecus;

Considerando que, en los seis Estados que se sitúan por encima de dicha mediana, los sistemas de garantía ofrecen a los depositantes una cobertura de sus depósitos má elevada; que no resulta oportuno imponer a estos sistemas, algunos de los cuales han sido creados recientemente en aplicación de la Recomendación 87/63/CEE, modificaciones al respecto;

Considerando que el mantenimiento en la Comunidad de sistemas que ofrezcan una cobertura de los depósitos superior al mínimo armonizado puede dar lugar, en un mismo territorio, a diferencias de indemnización perjudiciales para los depositantes y a condiciones desiguales de competencia entre las entidades nacionales y las sucursales de entidades de otros Estados miembros; que resulta oportuno, para superar estos inconvenientes, autorizar la adhesión de las sucursales al sistema del país de acogida a fin de que puedan ofrecer a sus depositantes las mismas garantías que ofrezca el sistema del país donde estén establecidas;

Considerando que, para acelerar los pagos en concepto de garantía, conviene no esperar a que se incoe un procedimiento de insolvencia, salvo si ello se produce en un plazo de 10 días después de que los depósitos hayan pasado a considerarse indisponibles debido a la imposibilidad por parte de una entidad de crédito de hacer frente a la obligación de restituirlos con arreglo a las disposiciones legales y contractuales aplicables en la materia;

Considerando que varios Estados miembros disponen de sistemas de protección de depósitos que están bajo la responsabilidad de organizaciones profesionales, que otros Estados cuentan con sistemas creados y regulados por disposiciones legales y que determinados sistemas, si bien han sido establecidos por convenio, se rigen en parte por disposiciones legales; que esta diversidad de regímenes sólo plantea problemas en lo que respecta a la adhesión obligatoria al sistema y a la exclusión del mismo; que, por consiguiente, conviene prever disposiciones que limiten las facultades de los sistemas a este respecto;

Considerando que uno de los objetivos de la protección mínima armonizada prevista por la Directiva es garantizar a los depositantes una cobertura hasta un determinado importe, excluyendo de la misma únicamente los depósitos de las demás entidades de crédito y los créditos sujetos a condiciones especiales como son los depósitos subordinados; que, no obstante, debe facultarse a los Estados miembros para limitar tal protección a los depositantes que carezcan de la posibilidad de evaluar la política financiera de las entidades a las que confían sus depósitos, permitiéndoles excluir de la garantía determinadas categorías de depositantes o de depósitos;

Considerando que se ha optado por un límite mínimo armonizado por depositante y no por depósito; que, desde esta óptica, es importante tener en cuenta los depósitos realizados por depositantes que, bien no figuran como titulares de la cuenta, bien no son los únicos titulares; que el límite debe, por tanto, aplicarse a cuantos depositantes puedan identificarse; que no ocurre lo mismo con las inversiones colectivas en valores mobiliarios, realizadas por mediación de organismos financieros y sujetas a normas específicas que no existen para los depósitos antes señalados;

Considerando que, de conformidad con las Directivas relativas al acceso a la actividad de entidades de crédito cuya sede social está situada en un tercer Estado y respetando, en particular, el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/780/CEE del Consejo⁽⁴⁾, cuya última modificación la

(4) DO nº L 322 de 17.12.1977, p. 30

constituye la Directiva 89/646/CEE, los Estados miembros pueden decidir si autorizan a las sucursales de dichas entidades para que ejerzan actividades en su territorio y en qué condiciones pueden hacerlo; que estas sucursales no disfrutarán ni de la libertad de prestación de servicios, en virtud del párrafo segundo del artículo 59 del Tratado, ni de la libertad de establecimiento en los demás Estados miembros; que, por consiguiente, un Estado miembro que autorice la actividad de tales sucursales puede permitirles o exigirles que se adhieran al sistema de garantía existente en su territorio; que no obstante, es necesario imponer a dichas sucursales la obligación de informar a los depositantes de si están afiliadas o no a un sistema de garantía y del alcance y los límites de la garantía;

Considerando que la información de los depositantes es un factor esencial para su protección y debe, por tanto, quedar también sujeta a un mínimo de disposiciones vinculantes;

Considerando que la garantía de depósitos es un elemento fundamental para la realización del mercado interior y un complemento imprescindible del sistema de supervisión de las entidades de crédito por la solidaridad que crea entre todas las entidades de un mismo centro financiero, en el caso de que una de ellas se encuentre en dificultades;

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

Depósito

Los saldos acreedores que procedan de fondos que se hayan mantenido en cuenta o de situaciones transitorias generadas por operaciones bancarias normales, que la entidad de crédito deba restituir en las condiciones legales y contractuales aplicables, así como los créditos representados por títulos transmisibles emitidos por la entidad de crédito.

Cuenta conjunta

Una cuenta abierta a nombre de dos o más personas o sobre la que tengan derechos dos o más personas y que pueda funcionar con la firma de una o más de éstas.

Depósito indisponible

El depósito que, por encontrarse la entidad de crédito en estado de crisis financiera, no pueda restituirse en las condiciones legales y contractuales aplicables a tal reembolso.

Esta suspensión de pagos no deberá necesariamente ser declarada o decidida por una autoridad judicial o administrativa, bastando con que se prolongue de forma efectiva durante 10 días consecutivos.

A la expiración de este plazo el depósito se considerará indisponible.

2. Los sistemas de garantía no reembolsarán los siguientes depósitos:

- los compromisos contraídos con otras entidades de crédito;
- los préstamos subordinados, esto es, aquellos que sean objeto de acuerdos vinculantes en virtud de los cuales no deban ser reembolsados en tanto no se hayan saldado las demás deudas en caso de quiebra o liquidación de la entidad de crédito.

Artículo 2

1. Cada Estado miembro velará por la implantación en su territorio de uno o varios sistemas de garantía de depósitos a los que se adherirán obligatoriamente todas las entidades de crédito autorizadas en dicho Estado miembro con arreglo al artículo 3 de la Directiva 77/780/CEE. Estos sistemas protegerán a los depositantes de las sucursales creadas por dichas entidades en otros Estados miembros de la Comunidad.
2. Las sucursales de una entidad de crédito autorizadas en otro Estado miembro podrán solicitar su adhesión voluntaria al sistema que cubra la categoría de entidades a la que pertenezcan en el Estado en que estén establecidas, con el fin de completar la garantía de que ya disfruten sus depositantes con arreglo a la cobertura obligatoria ofrecida por el sistema de garantía a que se refiere el apartado 1.

Los Estados miembros velarán por que, en todos los sistemas de garantía, se prevean condiciones objetivas aplicables a la adhesión de dichas sucursales.

3. Si una de las entidades de crédito cuya adhesión es obligatoria con arreglo al apartado 1, o una de las sucursales que se haya acogido a la adhesión facultativa prevista en el apartado 2, no cumple las obligaciones que le incumben en su calidad de miembro de un sistema de garantía, se informará de ello a la autoridad de supervisión que haya concedido la autorización.

Tras haber tomado todas las medidas necesarias para obtener el cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad de crédito o de la sucursal y una vez tenga conocimiento de las decisiones adoptadas por la autoridad de supervisión (saneamiento o revocación de la autorización, por ejemplo), podrá decidirse la exclusión del sistema de garantía de la entidad de crédito o de la sucursal. En tal caso, la garantía de que disfruten los depositantes de dicha entidad o sucursal se mantendrá durante doce meses a contar desde la fecha de exclusión.

Artículo 3

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/780/CEE, los Estados miembros podrán prever que las sucursales establecidas por entidades de crédito cuya sede social se encuentre fuera de la Comunidad se adhieran a un sistema de garantía de depósitos existente en su territorio.
2. En cualquier caso, los directivos de las sucursales extranjeras facilitarán a los depositantes la información necesaria para que éstos puedan:
 - bien determinar el sistema de garantía del que forme parte la sucursal y averiguar qué restricciones o límites máximos comporta el sistema,
 - bien tener conocimiento de que no existe tal garantía.
3. La información a que se refiere el apartado 2 estará disponible en la lengua o lenguas nacionales del Estado miembro en que esté establecida la sucursal y se redactará de manera clara y comprensible.

Artículo 4

1. Los sistemas de garantía de depósitos preverán que, en el supuesto de crisis financiera de la entidad de crédito que haga indisponibles los depósitos, se asegure una cobertura de hasta 15.000 ecus para el conjunto de depósitos de un mismo depositante.
2. Los Estados miembros podrán prever que determinados depositantes, o determinados depósitos, queden excluidos de dicha garantía o gocen de una cobertura inferior. La lista de estas excepciones figura en el Anexo.
3. El presente artículo no impedirá el mantenimiento o la adopción de disposiciones que aumenten la cuantía máxima de la garantía.
4. Los Estados miembros podrán limitar la garantía prevista en el apartado 1 o la mencionada en el apartado 3 a un porcentaje del importe de los depósitos. No obstante, el porcentaje garantizado deberá ser superior o igual al 90% del total de los depósitos mientras el importe que deba abonarse en concepto de garantía no alcance los 15.000 ecus.

Artículo 5

1. Los límites mencionados en los apartados 1, 3 y 4 del artículo 4 se aplicarán al conjunto de los depósitos realizados en la misma entidad de crédito, con independencia de su número, divisa y localización en la Comunidad.
2. Para calcular los límites previstos en los apartados 1, 3 y 4 del artículo 4, se tomará en consideración la parte correspondiente de cada depositante de una cuenta conjunta.

En ausencia de disposiciones específicas, la cuenta se repartirá a partes iguales entre los depositantes.

3. Cuando el titular de una cuenta no sea el beneficiario económico de los importes depositados en ella, la garantía cubrirá al beneficiario económico. Cuando haya varios beneficiarios económicos, para calcular los límites previstos en los apartados 1, 3 y 4 del artículo 4, se tomará en consideración la parte correspondiente de cada beneficiario.

La presente disposición no será aplicable a las inversiones colectivas en valores mobiliarios.

Artículo 6

1. Los Estados miembros preverán que los directivos de la entidad de crédito informen a sus depositantes de los principales elementos que permitan determinar el sistema de garantía del cual formen parte la entidad y sus sucursales dentro de la Comunidad. Las restricciones o límites máximos que el sistema de garantía comporte se precisarán de manera fácilmente comprensible.
2. La información prevista en el apartado 1 se presentará en la lengua o lenguas nacionales del Estado miembro en que esté establecida la sucursal y los límites o cuantías máximas de garantía, así como el importe de los pagos previstos, estarán denominados tanto en ecus como en la moneda nacional.

Artículo 7

1. Los pagos correspondientes a la garantía prevista en los artículos 4 y 5 se efectuarán en un plazo de 3 meses a partir de la fecha en que el depósito pase a considerarse indisponible, o de la declaración por parte de una autoridad administrativa o judicial del estado de suspensión de pagos, si ésta se produce antes de dicha fecha.

2. Por motivos justificados que sólo se refieran a determinados depositantes o depósitos, los directivos del sistema de garantía podrán solicitar a la autoridad de supervisión que prorrogue el plazo previsto en el apartado 1. La prórroga no podrá ser superior a tres meses.
3. Los directivos del sistema de garantía no podrán invocar los plazos a que se refieren los apartados 1 y 2 para denegar el beneficio de la garantía a un depositante que, por su alejamiento o por cualquier otro motivo justificado, no haya podido hacer valer a tiempo su derecho a un pago en concepto de garantía.
4. Los documentos relativos a las condiciones y formalidades que deban cumplirse para percibir los pagos correspondientes a la garantía mencionada en el apartado 1, se redactarán de forma detallada en la lengua o lenguas nacionales del Estado miembro en que se halle el depósito garantizado.
5. Los pagos correspondientes a la garantía se efectuarán, bien en la moneda nacional del Estado miembro en que se halle el depósito garantizado, bien en ecus, independientemente de la divisa en la que estén denominados los depósitos.

Artículo 8

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 1 de enero de 1994. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de tal referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán la forma de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 9

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

ANEXO

Lista de los depósitos a que se refiere el apartado 2 del artículo 4

1. Depósitos de las entidades financieras a que se refiere el apartado 6 del artículo 1 de la Directiva 89/646/CEE.
2. Depósitos de las empresas de seguros.
3. Depósitos del Estado y de las Administraciones centrales.
4. Depósitos de los entes públicos regionales, provinciales, municipales o locales
5. Depósitos de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.
6. Depósitos de los fondos de pensiones o jubilación.
7. Depósitos de los administradores, directivos, socios con responsabilidad personal, personas que posean al menos el 5% del capital de la entidad de crédito, personas encargadas del control legal de los documentos contables y depositantes que tengan las mismas características en las filiales.
8. Depósitos de los parientes próximos y de terceros que actúen por cuenta de los depositantes señalados en el punto anterior.
9. Depósitos no nominativos.
10. Depósitos por los cuales el depositante haya obtenido de la entidad de crédito, a título personal, tipos de interés y ventajas financieras que hayan contribuido a agravar la situación financiera de la entidad.
11. Obligaciones emitidas por la entidad de crédito.

FICHA DE IMPACTO SOBRE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO

Título de la propuesta: Coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la garantía de depósitos.

1. Principal justificación de la medida

El objeto principal de la medida es garantizar, en toda la Comunidad y en caso de crisis financiera de una entidad de crédito que tenga en ella su domicilio social, el pago de hasta 15.000 ecus a todos los depositantes en un plazo de tres meses.

Esta protección mínima tiene, asimismo, por objetivo evitar retiradas masivas de fondos cuando circulen rumores (con fundamento o sin él) sobre la solvencia del banco.

2. Características de las empresas afectadas

Las empresas a las que atañe la adhesión a un sistema de garantía son las entidades de crédito, es decir, una categoría de empresas autorizadas objeto de una supervisión cautelar.

La cobertura de los depósitos, por su parte, se refiere, salvo excepciones señaladas en una lista limitativa, a todos los depósitos por debajo de 15.000 ecus efectuados por personas tanto físicas como jurídicas.

3. Obligaciones directamente impuestas a las empresas

Las empresas afectadas, esto es, las entidades de crédito, deben adherirse al sistema de garantía pertinente en el país donde se sitúe su domicilio social, el cual ofrecerá cobertura a sus depositantes y a los de sus demás sucursales en la Comunidad. Las entidades tienen también la obligación de informar a los depositantes.

La Directiva en sí no impone ninguna obligación a las empresas beneficiarias de la garantía de sus depósitos.

4. Obligaciones que pueden ser impuestas a las empresas por las autoridades locales

Las sucursales de entidades de crédito con domicilio social fuera de la Comunidad podrán verse obligadas a adherirse al sistema de garantía de su país de acogida.

5. ¿Existen medidas especiales para las PYME? ¿Cuáles?

La Directiva no contiene ninguna disposición dirigida especialmente a las PYME, pero, dado que los depósitos de las personas jurídicas disfrutarán de cobertura al igual que los de las personas físicas, se beneficiarán de esta extensión de la garantía a las personas jurídicas (que no está prevista en algunos de los sistemas existentes).

6. Efecto previsible

- a) sobre la competitividad de las empresas
- b) sobre el empleo

No habrá ningún efecto directo sobre la competitividad o el empleo. Esta medida se concretiza cuando la solvencia de la entidad se ve gravemente afectada y su recuperación es ya, en principio, imposible.

7. ¿Se ha consultado a los interlocutores sociales? ¿Cuál es su opinión?

Las federaciones europeas de entidades de crédito, así como EURO-FIET, que representa a los trabajadores de dichas empresas, han sido consultados.

En conjunto, las asociaciones profesionales son partidarias de que se pague un mínimo de 15.000 ecus en concepto de garantía. Dichas asociaciones han presentado observaciones con respecto a algunas de las condiciones de esta garantía.

ISSN 0257-9545

COM(92) 188 final

DOCUMENTOS

ES

10

N° de catálogo : CB-CO-92-270-ES-C

ISBN 92-77-45282-X

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
L-2985 Luxemburgo